

Los Desafíos de la Socialdemocracia en el Futuro Inmediato

*Sen. Gabino Cué Monteagudo**

A lo largo de su historia, desde su ya lejano origen en los debates del Siglo XIX entre las distintas corrientes que pugnaban por alternativas al sistema capitalista, la socialdemocracia ha atravesado por cambios de perspectiva que reflejan con toda claridad su enorme capacidad para entender las coyunturas históricas y diseñar nuevos objetivos y nuevas formas de alcanzarlos.

Lo que no cambia, sin embargo, es su reivindicación permanente de las causas mayoritarias, su preocupación central por el bienestar del pueblo. En las nuevas condiciones históricas, particularmente frente a las notables transformaciones que han ocurrido en el ámbito de la organización de la actividad productiva, de la distribución

Al respecto, los cambios asociados a la fase de mundialización del capitalismo, como la deslocalización de la producción, la desregulación, la extraordinaria intensificación de los intercambios comerciales, la generación de un flujo de intercambios económicos en tiempo real posibilitado por la revolución en las tecnologías de la información, así como las políticas neoliberales que empujan hacia la retracción de la actividad estatal, han producido ya una intensa actividad en el seno de la socialdemocracia, impulsada por la necesidad de mostrar críticamente los efectos destructivos del orden social y del entorno ambiental que trae consigo el sistema capitalista en la fase de Globalización.

Ahora bien, no solo la democracia sino en general las corrientes opositoras a la Globalización capitalista, la izquierda social en mayor medida que la política, han asumido un fuerte protagonismo a nivel mundial en esta necesaria crítica que, entre sus logros más importantes, no solamente señala las dañinas consecuencias de dicha Globalización, sino que ante todo ha logrado trascender a la búsqueda de alternativas viables y sustentables para la organización de la vida social. El Foro Social Mundial, que recientemente tuvo lugar en Nairobi, Kenia, constituye sin duda alguna un esfuerzo formidable en la tentativa de demostrar que, efectivamente, otro mundo es posible.

En nuestro particular espacio geográfico, América Latina, por otra parte, la lucha por un futuro distinto al Capitalismo neoliberal tiene sus propias manifestaciones. En la última década, gobiernos de izquierda han ascendido al poder en un número importante de países, señalando la insatisfacción popular con una Globalización que es dramáticamente excluyente. Las políticas neoliberales generaron en el subcontinente procesos de empobrecimiento generalizado de las masas y una escandalosa profundización de la brecha entre ricos y pobres.

* Senador de la República, Miembro del Grupo Parlamentario de Convergencia en la H. Cámara de Senadores, LX Legislatura.

No obstante, el empobrecimiento generalizado de las mayorías y el descenso en la calidad de vida de las clases medias no pueden, por sí mismos, explicar el reciente protagonismo que los movimientos sociales y los partidos y organizaciones de izquierda han adquirido particularmente en la región sudamericana. Estos procesos de movilización implican un aspecto central que requiere de mayores y mejores explicaciones: se trata del despertar de la ciudadanía, del inicio de la construcción de un ciudadano interesado en los asuntos públicos, que ya no está dispuesto simplemente a emitir su voto y esperar, cada cuatro o seis años, mejor suerte. Lejos de ello, los hombres y mujeres en Latinoamérica han lanzado una fuerte advertencia a nuestros sistemas políticos, y particularmente a las clases políticas tradicionales: que ahora han saltado a la palestra de la vida pública y no están dispuestos a abandonarla.

Esta circunstancia nos plantea un problema fundamental que tiene que ver con la pregunta sobre la capacidad de nuestras estructuras políticas para responder a esos desafíos.

Siempre he pugnado por la necesidad de recuperar la dimensión ética de la política, por su reconstrucción como ese espacio de deliberación de proyectos históricos y, particularmente, por la recuperación de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. En una palabra, estoy convencido de que no podemos seguir teniendo el monopolio de las decisiones sobre asuntos que nos conciernen a todos y que hemos de apuntar, como horizonte de nuestra lucha, a una verdadera sociedad de ciudadanos.

Pero no parece ser evidente entre la clase política de este país, la necesidad de transformar esas estructuras que han dado muestras importantes de haberse agotado. Existe un ensimismamiento paralizante que conduce a una autocomplacencia injustificada. Los eventos del último año y medio han puesto de manifiesto con claridad meridiana que las cosas en el país no van bien. Particularmente, los últimos meses dieron cuenta de un malestar generalizado no solo hacia las decisiones políticas y económicas tomadas por los poderes formales sino sobre todo hacia la forma en que se adoptan. La falta de claridad en la actuación de los organismos electorales, la parcialidad y la corrupción en la procuración y administración de justicia, el ejercicio del poder político para la satisfacción de intereses particulares, el uso faccioso de la ley, entre otros, han producido muestras de inconformidad generalizada que, en su miopía, la clase política pretende atribuir a las intenciones oscuras de adversarios, negándoles toda legitimidad.

Pero hay en esto un asunto fundamental: los problemas, que son reales, no desaparecerán por ignorarlos.

Por otra parte, un elemento adicional que incrementa las dificultades para dar soluciones eficaces a los problemas reales, tiene que ver con la reducción de la actividad política a un espacio mercantilizado, orientado pragmáticamente, penetrado por consideraciones de mercadotecnia e impulsado por la concepción del poder como un botín personal o de grupo.

En este sentido puede entenderse la afirmación, hecha por Felipe Calderón en su reciente viaje por Sudamérica, de que no importan ideologías políticas sino que la gente tenga la posibilidad de elegir. Ni duda cabe de que se trata, por lo demás de una reducción de la democracia a un juego sin sentido, puesto que, sin distinciones ideológicas, que se expresan

en diferentes proyectos del país, ¿cómo plantearse siquiera la posibilidad de elegir? ¿Cómo se puede elegir cuando no hay elementos de distinción? ¿Qué es exactamente lo que las personas tendrían que elegir? ¿El carisma de los candidatos, su apariencia física, su capacidad para el engaño?

Efectivamente, el planteamiento de que no hay derechas ni izquierdas, que no hay puntos de diferenciación, constituye la expresión más diáfana (y más burda por cierto), de la transformación de la arena política en un espectáculo circense, en una lucha pragmática, sin principios y estrictamente en pos del poder, sin claridad alguna y sin verdadero compromiso. Contra esa grosera reducción de esa noble actividad, profundamente humana, nos hemos pronunciado de manera recurrente. No podemos permitir que se la niegue como un espacio de discusión de visiones diferentes, por momentos encontradas, y sobre todo como el espacio en el que se tienen que construir los acuerdos. De lo contrario, corremos el riesgo de que la discusión sobre los proyectos de país se dé en otros ámbitos, de otras formas, no siempre pacíficas ni caracterizadas por la tolerancia.

Precisamente, la historia reciente del país, desde el año 2000, ha mostrado los riesgos de no entender esta situación.

Al respecto, la alternancia que permitió el arribo al poder de un partido distinto al PRI, después de más de setenta años de autoritarismo, no condujo a una oleada democratizadora. La euforia causada por el fin de la transición democrática en un entorno de madurez, de paz y civilidad desmintió las previsiones más pesimistas que anunciaban un cataclismo para el momento en que finalmente el PRI perdiera el poder. Porque todos sabíamos, con excepción de algunos priístas, que eso tendría que ocurrir. Aunque habría que admitir, a la distancia, que quizá la forma en que se dio el cambio no permitió plantear en su momento los enormes riesgos que significaba la llegada de la alternancia sin los cambios pactados que, en el caso de otras transiciones, habrían preparado precisamente la llegada de la alternancia. En México, en cambio, y fascinados por el carácter “anómalo” de nuestros fenómenos políticos, a la mayoría escapó entonces la necesidad de plantearse el problema de que las estructuras que soportaban al régimen priísta en realidad poco habían cambiado, y que si lo habían hecho, no era precisamente en la dirección de una democratización de la vida nacional.

La actuación del primer gobierno de la alternancia condujo las cosas precisamente por el camino menos deseable: en lugar de impulsar el desmantelamiento de las estructuras autoritarias, la ultraderecha se fue aferrando al poder y, en su momento, no dudó en utilizarlo violentando la legalidad para evitar que un proyecto que contaba con la simpatía popular tomara en sus manos el destino del país.

Pero hoy no se trata ya simplemente de hacer el ajuste de cuentas con nuestros errores, sino de partir de la situación a donde nos ha conducido la alternancia sin democratización, sin la construcción y consolidación de estructuras, instituciones, prácticas y normas propias de un sistema democrático, y empezar a discutir sobre las formas más adecuadas para dar inicio a esa construcción. En las condiciones actuales, de grave descomposición del régimen político, de un fracaso estrepitoso de la ultraderecha, no se trata de una concesión graciosa o de una idea brillante, sino de un imperativo que se respira por todo el país.

Porque el 2006 nos ha dejado con una sensación de orfandad. Se generalizó entre la población la imagen de un amargo despertar a la realidad después de un sueño que, por cierto, poco a poco fue convirtiéndose en pesadilla, pero respecto del cual aún suponíamos que nada podía ser peor. La controvertida elección presidencial y los primeros meses del nuevo gobierno no han hecho sino abonar a la percepción de que en realidad no hubo una regresión democrática sino que en realidad jamás salimos del autoritarismo. Porque los cambios ocurridos, como la pérdida de control del Legislativo por parte del partido en el gobierno, son insuficientes cuando el centro de gravedad de las decisiones políticas continúa en manos del Ejecutivo, y cuando las alianzas entre quienes se definieron durante décadas como enemigos históricos, han obstruido toda posibilidad de darle al Legislativo el papel central de la vida política.

Por estas razones, el 2007 presenta desafíos de enorme trascendencia para el futuro del país. Las elecciones en varios estados pondrán a prueba un sistema político tambaleante, que a pesar de todo se niega a reformarse.

Un sistema que sigue permitiendo e incluso protegiendo situaciones aberrantes como la que se ha presentado en el estado de Oaxaca. Porque allí, el problema está muy lejos de haberse resuelto, porque no han desaparecido en modo alguno las causas que dieron origen a la movilización social más formidable y duradera de los últimos décadas en nuestro país.

En Oaxaca, un gobierno autoritario, represor, corrupto, violento e ignorante de las necesidades populares, que viola los derechos fundamentales, cuestionado de origen por haber llegado al poder mediante un fraude escandaloso, se sostiene contra la voluntad mayoritaria del pueblo oaxaqueño, apoyado por oscuros intereses y por una coyuntura que le ha permitido sobrevivir más allá de sus propias posibilidades.

Un gobierno que ha ignorado sistemáticamente todo llamado a la mesura, al respeto a la legalidad y que supone torpemente que la inconformidad ciudadana es producto de la acción encubierta de individualidades. Un gobierno que no es capaz de asumir que la ciudadanía no es ya el ente manipulable y sujeto de engaños que el prisma convirtió en su reserva de votos.

A la inconformidad generada por su arribo al poder de manera antidemocrática, el gobernador añadió la ofensa de ignorar los reclamos populares respecto a la destrucción del patrimonio histórico y cultural. Pues ni siquiera fue capaz de entender que a los oaxaqueños no les preocupaba tanto si la modificación de lugares y edificios simbólicos implicaba su mejoramiento.

Por ello, el gobierno del estado justificó sus decisiones sobre la modificación de sitios históricos, con un alto valor simbólico para los oaxaqueños, mediante la supuesta necesidad de su modernización y de brindarles un mejor aspecto. Pero lo que el gobierno del estado nunca entendió es que la oposición popular no se sustentaba en la defensa de valores estéticos distintos a los profesados por los responsables de las obras o del propio gobierno, sino en la absoluta falta de claridad en los motivos, y particularmente en el reprochable desprecio que los responsables del gobierno manifestaron hacia el sentir y la inconformidad

ciudadana. La expresión¹ del entonces secretario general de gobierno a una reunión de ciudadanos que exigían información sobre el proyecto del zócalo de Oaxaca y sobre todo, que exigían se escuchara su opinión al respecto, es paradigmática de la forma de entender el ejercicio del poder de manera autoritaria, y dice mucho más que cualquier análisis teórico que pudiera hacerse al respecto.

Sin reconocer que la inconformidad ciudadana tenía fundamentos, y pretendiendo atribuir a sus adversarios políticos el malestar generalizado por las obras en la ciudad de Oaxaca, el gobierno del estado recurrió posteriormente a los resultados de una supuesta encuesta realizada entre la ciudadanía, la cual aseguraba que un elevado porcentaje de los entrevistados manifestaba su aceptación hacia las obras, que el resultado de las mismas le agradaba. Ingenuamente, el gobierno del estado asumía de esta manera que todo el problema se reducía a una cuestión estética, a un asunto de gustos. Lo importante sin embargo, no estaba ahí.

Supongamos por un momento que la referida encuesta fue realizada y que efectivamente los resultados corresponden a la utilización de una metodología adecuada para estudios de opinión; es decir, supongamos que el gobierno del estado actuó de buena fe (lo cual puede parecerles demasiado a algunos, tratándose del gobierno de Oaxaca) y que los resultados no fueron manipulados. Aceptemos los resultados. Pero enseguida podemos preguntarnos, a manera de ejercicio mental: ¿qué hubiera pasado si la mayoría de los entrevistados hubiera respondido que las obras no eran de su agrado? Simple y sencillamente hubieran tenido que aceptarlas de cualquier manera, porque tampoco es posible suponer que en ese caso las obras hubieran sido rehechas. La ciudadanía se ve así reducida a una instancia que únicamente puede decir si le gustó o no una obra que otros decidieron hacer.

Pero insisto, el problema no está ahí, el problema no es si el zócalo de Oaxaca es ahora más bello que antes, si nos gusta o no nos gusta. El problema de este asunto es que los ciudadanos oaxaqueños no tuvimos la menor oportunidad, ya no de decidir; sino siquiera de opinar sobre un asunto que nos concierne a todos. Porque el zócalo es de todos, es nuestro, no del gobierno del estado, y los recursos que se utilizaron, en una enorme cantidad, por cierto, también son nuestros, no del gobierno del estado; pero resulta que no tenemos la mínima oportunidad de decidir sobre nuestros espacios públicos y sobre la utilización de nuestros recursos. Ese es el verdadero problema, el de la ausencia de mecanismos de participación que aseguren que las decisiones públicas tienen todo el respaldo popular porque son expresión de su voluntad.

Por eso puedo asegurar que las elecciones locales de este año señalarán un cambio en la composición del poder en Oaxaca. Existen ahora condiciones de participación que harán muy difícil recurrir al fraude generalizado para burlar nuevamente la voluntad popular. El espacio para la acción de los socialdemócratas está ahí abierto. Es el momento de empezar a construir nuevas relaciones entre gobernados y gobernantes, de empezar a enterrar de una vez por todas los últimos resabios del autoritarismo que, en entidades como Oaxaca, se niegan a morir. Es preciso tener claridad: el autoritarismo no desaparecerá de la escena

¹ De acuerdo con las crónicas periodísticas, el entonces Secretario de Gobernación habría dicho a los presentes: "Háganle como quieran, el gobierno ya decidió".

histórica por sí solo. Es indispensable arrojarlo con la acción decidida y firme de todos aquellos comprometidos con el bienestar, con la justicia y la dignidad.

Es urgente hoy una amplia alianza de la socialdemocracia con todas aquellas fuerzas que estén dispuestas a superar la estrechez de los intereses de corto plazo, los cotos de poder y los privilegios, y que estén dispuestas a contribuir en la construcción de nuevas relaciones políticas, sustentadas en la centralidad del ciudadano, en el respeto a su individualidad, a sus aspiraciones y a su creatividad. Esa alianza tiene como su propósito inmediato generar una mayoría en el Congreso local, así como crear las condiciones para un triunfo en las elecciones municipales de Oaxaca, que permita trascender a una nueva fase en la que el objetivo de mediano y largo plazo deberá ser la erradicación del autoritarismo, de la corrupción, del cinismo, el servilismo y el atropello de los derechos fundamentales. En una palabra, la construcción de un Oaxaca democrático, solidario y justo, en la que el poder político se encuentre al servicio de las causas populares, que sea su expresión y que haga prácticamente imposible la separación entre ambos.

Esa es hoy la demanda principal de los oaxaqueños que en las calles expresan, con un grito que viene de las profundidades de la tierra, que ya basta, que es la hora de la gente y quien no lo entienda fracasará.

Esa es la lección del último año: Ulises Ruiz prometió durante su campaña para gobernador, que no permitiría ni marchas ni plantones; el resultado: el plantón más largo de toda la historia, con la ciudad en rebeldía, prácticamente en manos de sus habitantes, así como las marchas más grandes de toda la historia oaxaqueña.

El desafío está, pues, a la vista: crear, con generosidad, con firmeza de convicciones y sobre todo con la más absoluta disposición a la participación democrática, las bases de una nueva forma de hacer política que hagan posible arribar a una sociedad más justa y democrática, en la que los recursos públicos se orienten verdaderamente a la creación de condiciones de bienestar para todo el pueblo.

La socialdemocracia ha luchado en todas partes precisamente por la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos individuales, que reconoce la creatividad y la voluntad individual, pero sin contraponer a ello el bienestar colectivo. Declaramos falsa la alternativa entre mercado y dirección estatal de la economía. El mercado es incapaz de generar las condiciones de su propia sobrevivencia sin recurrir al poder del Estado. Por ello planteamos que ese poder debe utilizarse no solo en beneficios de las mayorías sino de una manera tal que recupere la iniciativa, la creatividad y la energía de los individuos y ponga a su disposición las condiciones que hagan posible una vida digna y socialmente productiva para cada uno. Seguimos creyendo que el bienestar de todos es la condición necesaria del bienestar de cada uno.